El Salvador

CIDAI

Proceso

informativo semanal

Año 24, No 1099

mayo 24, 2004

ISSN 0259-9864

"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte" *Ignacio Ellacuría*

Editorial 2

¿Qué sucede en el FMLN?

Política 4

El legado político de Flores

Economía 7

El alza de los precios del petróleo y la espiral inflacionaria

Social 9

Cuestionado aval a la Ley Antimaras

Regional 12

Torrijos y Ortega, dos casos diferentes

Reporte IDHUCA 15

Las niñas y niños no van a Ginebra

¿Qué sucede en el FMLN?

Tres meses después de los comicios que dejaron a Elías Antonio Saca al mando del Ejecutivo, el FMLN no sale de la crisis que se generó en su interior como consecuencia del desenlace de las elecciones. El partido de izquierda fue derrotado y la rendición de cuentas por ese fracaso no se hizo esperar. Los que exigen esa rendición de cuentas, de la cual debe derivarse un reajuste en las estructuras de dirección del partido, son quienes se opusieron a que Schafik Handal se erigiera como candidato a la presidencia, por considerar que era una figura poco competitiva y, en consecuencia, un rival fácil de vencer por el entonces candidato de ARENA, Elías Antonio Saca. Desde la óptica de los detractores de Handal, no hay más realidad que la de su derrota electoral; esa realidad obliga a hacer cambios al interior del FMLN, mismos que pasan por una redefinición de las estructuras de dirección del partido de izquierda. En palabras simples, de lo que se trata es que Handal y Salvador Sánchez Cerén se hagan a un lado, para que otros líderes efemelenistas —entre quienes se encuentra Óscar Ortiz— asuman las riendas de la institución partidaria en la coyuntura postelectoral y de inicio de un cuarto gobierno de ARENA.

Desde el círculo que rodea a Handal, la lectura de lo sucedido en las elecciones es bien distinta. Para los voceros de este sector del FMLN, si bien es cierto que las elecciones fueron ganadas por ARENA, esa victoria no fue legítima. El miedo, el chantaje y la manipulación fueron los factores que inclinaron la balanza a favor de ARENA; y, de no haber sido por esos factores anómalos, el FMLN se hubiera alzado con el triunfo. Para rematar su argumento, los seguidores de Handal se remiten al crecimiento electoral del partido, en más de ochocientos mil votos, el cual es atribuido a los méritos de su candidato.

Es decir, que el FMLN haya perdido las elecciones significa poco, dado el carácter ilegal y sucio de las mismas. Lo verdaderamente significativo es el aumento de sus votantes; ese es el éxito real del partido. Y ese éxito se debe a Schafik Handal, quien, lejos de haber sido un rival poco competitivo para ARENA, fue alguien que hizo temblar a la derecha, la cual no tuvo más remedio, para derrotarlo, que recurrir a la calumnia, la manipulación y al chantaje. La consecuencia práctica que se desprende de ello, en esta lectura, es que Handal, Sánchez Cerén y sus seguidores cercanos deben seguir regentando los destinos del FMLN, porque son los mejor preparados para hacer del partido un instituto político de éxito y con una identidad propia.

Así las cosas, en el FMLN se han perfilado dos posturas bastante nítidas acerca del desempeño del partido en las elecciones recién pasadas. Los unos apelan a ese desempeño para exigir la renovación de la máxima dirigencia; los otros se remiten a ese mismo desempeño para legitimar su permanencia en los máximos niveles de decisión partidaria. Sin embargo, ni los partidarios de la renovación, ni los que se resisten a ella han elaborado —porque no han tenido tiempo o porque no tienen capacidad— propuestas consistentes acerca de lo que puede (o debería) ser un proyecto de izquierda capaz de hacer frente a los grandes desafíos que tiene El Salvador en los momentos actuales.

Desde marzo pasado hasta ahora, los debates, polémicas, diferencias y conflictos al interior del FMLN se han centrado en torno a quiénes serán los

que controlarán las estructuras de dirección del partido. Lo sustantivo, la definición de una proyecto partidario capaz de convertirse en una alternativa viable y realista a la hegemonía de ARENA, no ha aparecido por ninguna parte. Por ahora, en el FMLN todo se ha reducido a un conflicto entre personas, sus trayectorias y sus credenciales particulares. No se ha tratado ni se trata de un conflicto de proyectos, sino de dejar en claro si los que tienen el control del partido son capaces de conservarlo o si, por el contrario, sus detractores van a tener la determinación y habilidad suficientes para desplazarlos del mismo. Se trata, pues, de un juego de poder; un juego en el que lo que se disputa es el control del partido, no su orientación institucional, su identidad o su posicionamiento socio-político.

Por eso, pese a lo prolongado y a lo intenso de las polémicas entre los efemelenistas, lo característico del debate interno en el partido de izquierda es la pobreza de contenidos ideológicos y políticos. Y es que tales contenidos brillan por su ausencia. Lo que pesa, al igual que en anteriores situaciones de crisis en el FMLN, es la ambición desmedida por conservar el poder de decisión o por hacerse del mismo a cualquier precio. Esta es la historia de siempre en el FMLN. Todavía no se ha modernizado y, peor aun, ahora parece estar funcionando como un partido comunista de viejo cuño, donde el Secretario General decide, por su cuenta y riesgo, los destinos de la organización. No es causal que las cosas sucedan así en el FMLN; al fin y al cabo, el Partido Comunista (PCS) y las FPL —organización fundada por ex miembros del PCS —, terminaron por quedarse con sus estructuras fundamentales.

La crisis del FMLN no tiene visos de solución. En estos momentos, Schafik Handal y los suyos tienen asegurado el control del partido. No será fácil desplazarlos de ese control. Quienes lo pretenden, podrán forcejear todo lo que quieran, pero eso no es garantía de nada. Quizás terminen, tras nadar contra corriente, por acomodarse y aceptar las reglas de juego impuestas desde arriba. Quizás insistan en su rebeldía y terminen fuera del partido, como les sucedió a otros antes que a ellos. Mientras tanto, el FMLN seguirá divorciándose de la sociedad, sobre todo de aquellos sectores suyos insatisfechos con un ejercicio de poder de la derecha que nos les ha dejado más que marginación y deterioro en sus condiciones de vida.

Un desafío grave que tiene la sociedad salvadoreña en la actualidad es la consolidación de un bloque hegemónico de derecha que aspira a controlarlo todo, en los planos económico, político y social. El FMLN no está haciendo nada para contrarrestar esta hegemonía de la derecha. Al contrario, su dilatada crisis interna facilita la embestida de la derecha sobre el conjunto de la sociedad. Al parecer, sus principales figuras no se dan cuenta de lo que sucede fuera del partido, que se ha convertido en un mundo cerrado para ellos. Para el FMLN puede ser costoso, en términos electorales, dar la espalda a la sociedad. Para la sociedad puede ser costoso, en términos económicos, no tener más opciones que las planteadas por la derecha. Ambas cosas, merecen la atención de las mentes más lúcidas y de los miembros más honestos del FMLN. Es a estos a los que habría que darles un espacio en el partido.

El legado político de Flores

Se va Francisco Flores. El 1º de junio pasará la banda presidencial a Elías Antonio Saca. Lo primero que puede decirse de este traspaso es que simboliza la consolidación del control de ARENA sobre el país. El sueño del desaparecido mayor Roberto D´Aubuisson, fundador del partido y conocido, entre otras cosas, por su responsabilidad en sonados casos de asesinatos y violación de los derechos humanos durante la guerra, sigue haciéndose realidad.

Los inicios dubitativos de Flores

En 1998, cuando accedió a la presidencia de la Asamblea Legislativa, Francisco Flores era apenas un desconocido que se abría paso en la vida política nacional. Habiendo sido reelegido diputado en las elecciones legislativas de 1997, Flores había pasado con más pena que gloria, entre otras dependencias estatales, en el extinto Ministerio de Planificación, durante el mandato del presidente Cristiani. No se recuerda ninguna iniciativa política especial que haya tomado el joven Viceministro de planificación. En la biografía política de Flores que publica la página electrónica de la presidencia de la República se dice que "reformuló el Plan de Gobierno tras la firma de los Acuerdos de Paz". A estas alturas, nadie en el país recuerda tal plan, ni mucho menos que haya ayudado a cambiar la situación socio económica de los salvadoreños.

Con estos antecedentes, en su segunda participación en la Asamblea Legislativa, el diputado Flores logró hacerse con la dirección del congreso. En esa nueva etapa, si bien que se puede hablar de un político sereno, que supo evitar una excesiva confrontación entre su partido y la oposición, tampoco Flores se destacó de manera inequívoca. Tan es así que cuando anunció sus intenciones de ser el designado para competir en las elecciones presidenciales de 1999, tomó por sorpresas a algunos dirigentes de su partido, quienes finalmente aceptaron a regañadientes su postulación para evitar cualquier desgaste.

Con la llegada a casa presidencia de Flores se coronó la carrera de un joven político taciturno y sereno, según cuentan algunos de sus conocidos. Hasta ese entonces, dirían muchos, Flores vivía a la sombra del renombre de su suegro, un ideólogo de ARENA, asesinado por los insurgentes durante el conflicto armado. Su perfil de funcionario de segunda categoría parece obedecer a este patrón. Había ocupado cargos de bajo perfil en los gobiernos de ARENA. Al postularse a la presidencia en 1998 —eventuales investigadores sobre este momento histórico del país tendrán que dilucidar con el apoyo específico de qué sectores areneros— Flores cambió su destino de niño mimado de la política criolla, que hasta ese momento daba la sensación de vivir gracias a las conexiones políticas de sus parientes.

Desde los primeros días del anuncio de sus ambiciones presidenciales hasta su elección, Flores aprovechó muy bien su fama de joven intelectual moderado para catapultase en el imaginario político de los salvadoreños. En ese momento, los políticos tradicionales gozaban de mala fama —aún sigue presente esta percepción— y Flores se presentó como abanderado de una nueva generación, dispuesta a cambiar la percepción ciudadana generalizada sobre política. Su eslogan de campaña hablaba de nuevas alianzas y de una nueva manera de hacer política en el país. Flores decía que sus adversarios no eran los políticos de los partidos opositores, sino los problemas que aquejaban a la población. A guisa de campaña electoral, emprendió una peregrinación a lo largo de los 262 munici-

pios del país —dijo él en ese momento—, para escuchar a los salvadoreños. Además, se vendió la idea que era un intelectual de primer nivel, dispuesto a poner sus amplios talentos académicos al servicio de su país.

Las ideas anteriores fueron tan expandidas que un comentarista relató en estos términos, en 1999, en una columna de opinión con el motivo de la toma de posesión de Flores, su admiración por un político que considera fuera de serie. "El discurso de Francisco Flores que escuchamos los salvadoreños hoy por la mañana, no puede más que llenarnos de esperanzas, pues se apartó de la demagogia tradicional de los políticos. La repetida mención del individuo como eje central de su programa nos demuestra que hay una claridad filosófica detrás del análisis, haciendo mención importante que no sólo se trata de fomentar los derechos individuales, también se hace necesario exigir el cumplimiento de sus obligaciones a través de la responsabilidad compartida".

Las promesas

En concordancia con la visión "futurista" con que se presentó a Flores, se elaboró una campaña de comunicación esencialmente mediática. El candidato Flores aprovechó sus dotes histriónicas para captar la atención de los salvadoreños. En ese entonces, se decía de él que era ejemplo vivo de la simplicidad y la sencillez. Se puso como ejemplo su "habilidad para lograr el consenso, el orden y la equidad" durante su paso a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Estaba dispuesto a escuchar a los salvadoreños, sin entrar en polémica con sus contrincantes. Se hizo famoso con unas frases tan cautivantes para el ingenuo, como falaces y vagas. "El debate es estéril —dijo Flores durante su discurso de toma de posesión— si no edifica. La crítica, si no propone y garantiza propuesta mejor, es inútil. Este día hemos de comprometernos todos a dar a los salvadoreños un país mejor que aquel otro que legaron nuestros padres. Y sólo será posible sí le damos siempre la mejor clase política, la constructora de la sociedad justa. Yo me comprometo con ustedes en esta ética política".

Para Flores, la construcción política del país no debería considerarse bajo ninguna óptica como obra de un solo partido o un único actor. "Sostener y cuidar nuestra ya firme Democracia —decía— es una responsabilidad compleja. El país, que en estas palabras deseamos para nuestro pueblo, no puede ser la obra sola de un partido o de un Gabinete. Pide la participación creativa de todas las fuerzas vivas de la nación: Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Fuerza Armada, Iglesias, Universidades, Sindicatos, Gremiales, Organizaciones No Gubernamentales y Comunidad Internacional. Llevemos a nuestro pueblo lo que en provecho suyo nos une. Y discutamos y disintamos en el modo mejor de hacerlo. A nuestra oposición política, garantía de la Democracia, hacemos hoy una respetuosa apelación, que para mí y mi propio Gabinete deseo".

Cinco años después, ¿cuál es el legado de Flores?

Para juzgar con propiedad el quinquenio de Francisco Flores hay que hacerlo desde dos criterios complementarios. En primer lugar, en función de los parámetros que él mismo fijó al principio de su mandato. En segundo, sobre el alcance de sus respuestas a los hechos concretos con los que tuvo que enfrentarse durante sus años de gobernante. Flores, refiriéndose a su partido, durante su discurso de toma de posesión, dijo que quería hacer que los jóvenes encuentren en ARENA el cauce a sus legítimas aspiraciones de expresión política. Dicho de otra manera, quería que se perpetuara la presencia de este partido en las máximas instancias de decisión política del país.

Desde esta óptica, Flores logró su apuesta. Y, tendrá que concedérsele un sitio de honor en la historia de ARENA, al

lado de los políticos exitosos de este partido. No entregó el poder a un candidato opositor, una de las peores pesadillas con la que se debatieron los areneros durante un buen lapso del mandato de Flores. Su partido obtuvo el mismo número de diputados que el FMLN en las elecciones del 2000 y en 2003 fue literalmente dejado atrás por el partido de izquierda. En fin, durante el mandato de Flores, ARENA pasó los mayores apuros durante su corta existencia electoral. Flores fue cuestionado públicamente por los principales jerarcas areneros. Se decía que la tozudez del presidente le iba a costar las elecciones presidenciales a la derecha.

Sin embargo, contra los profetas de la desgracia, Flores supo enderezar el rumbo. No sólo su partido ganó holgadamente las elecciones, lo que significa un profundo respiro en sus filas, sino que Flores tomó su revancha personal sobre sus detractores. Reprendió públicamente, durante una Convención Nacional, a los dirigentes de su partido que habían cuestionado su manera de conducir el país. De modo que desde este punto de vista, puede considerarse que Flores cumplió su cometido. Además, el nombre de El Salvador ha sonado reiteradamente en el mundo. Una vez como firme aliado de la administración Bush en su guerra en Irak, otras veces por el apoyo que los inmigrantes ilegales han obtenido por parte del gobierno de los Estados Unidos, que les ha ofrecido a algunos la posibilidad de quedarse en esa nación.

Como puede observarse, los logros políticos que aquí se inscriben en el haber de Flores consisten en tópicos pasajeros, bastante alejados de las promesas de su campaña. Flores prometió una nueva manera de hacer política. Pero, para cualquier observador atento de la vida nacional en los últimos cinco años, no ha habido entendimiento con la oposición, ni mucho menos se ha avanzado en la consolidación de la joven democracia salvadoreña. Al contrario, las instituciones más emblemáticas de la misma han sido zarandeadas por toda clase de dificultades, relacionadas precisamente con la arrogancia de Francisco Flores.

No obstante que Flores haya organizado unas elecciones cuyos resultados han sido avalados por la comunidad internacional, un sector importante de la oposición contesta el proceso político y considera ilegítimo el mandato obtenido por el sucesor de Flores. La postura de la dirección del FMLN no hará variar los resultados electorales, ni mucho menos hará sombra internacional a la presidencia de Saca. Sin embargo, no cabe duda que ello sienta un mal precedente en la coyuntura política post Acuerdos de Paz. Además, la coyuntura de extrema confrontación que se vivió en la campaña es fruto de los cinco años de enfrentamiento entre la oposición y el gobierno de Flores. Finalmente, el mayor daño que pudo haber cometido su gobierno ha sido su ataque permanente a las otras instituciones del Estado. De todas ellas, el sistema judicial ha sido el más vilipendiado. En el contexto de su lucha en contra de la delincuencia, Flores linchó políticamente a los jueces y, a su paso, el prestigio de la institución judicial.

A fin de cuentas, han sido cinco años de tensión y de dura labor para Francisco Flores. Ganó muchas batallas políticas durante este quinquenio. Sin embargo, nunca encontró la estatura de un jefe de Estado, destacado por su visión de largo plazo y deseoso de dejar un legado político imperecedero al país que ha gobernando. La ética nueva ética política con la que se comprometió Flores brilló por su ausencia. Nunca dio señales de considerar a la oposición como parte integrante de la construcción de la nueva sociedad que anhelan los salvadoreños.

El alza en los precios del petróleo y la espiral inflacionaria

El fenómeno del alza de los precios del petróleo tiene su raíz fuera de las fronteras salvadoreñas e incluso latinoamericanas. Los titulares de los periódicos a escala mundial destacan el impacto de esta alza de precios en las economías, principalmente aquellas que no son productoras de este insumo, lo cual tiene consecuencias directas en las relaciones de todos los sectores económicos y el costo de la vida. ¿A qué se debe esta alza generalizada en los precios del crudo y cuáles son sus consecuencias para países como El Salvador?

Según diversos analistas, esta escalada en los precios en el crudo no ha tenido parangón casi desde tiempos de la invasión de Estados Unidos en Kuwait, en 1990. Los precios han tenido una variación alcista de más de 25%, donde el barril de petróleo ha llegado alcanzar precios récord de hasta los $41 por unidad en los ya cinco meses que lleva el corriente año y no se vislumbran soluciones efectivas para detener esta tendencia en el corto plazo.

Lo que está detrás de la volatilidad en los precios del crudo tiene mucho que ver con quienes controlan o tienen capacidad de incidir en los precios de esta materia prima. Este poder de élite reside en pocas manos, es decir, oligopolios, como el que tienen los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y potencias mundiales como Estados Unidos. Ha habido un comportamiento fuera de lo normal en la forma en que se ha desarrollado el flujo de oferta y demanda de este insumo y estos países son los responsables de estas distorsiones.

El primer problema o distorsión en este flujo de oferta y demanda tiene que ver con el elevado nivel de dependencia económica a este recurso por parte de las economías a escala global y el "terror económico" a perder este insumo, lo cual podría hacer que algunos países comenzaran a atesorar este recurso en tiempos en que conflictos como el de Irak con Estados Unidos pone en riesgo el libre flujo de la producción del crudo. Irak ha disminuido su producción de petróleo a raíz del conflicto, lo que podría provocar una disminución en la oferta del crudo en el ámbito global. Pero a su vez, la demanda se ha incrementado a niveles récord, gracias a que países como Estados Unidos, China, la India y otros parecen estar reservando y comprando mayores suministros de crudo para no ser afectados ante una escasez de este bien. El resultado es pues, una decreciente oferta del crudo contrastado con una creciente demanda del mismo por parte de potencias mundiales.

En definitiva, si tal como lo afirma la agencia británica de noticias, la BBC, el contexto en el Medio Oriente parece no tener cambios sustanciales para que aumente la producción significativamente y según la Agencia Internacional de Energía, actualmente se tiene a nivel del planeta la mayor demanda de crudo de los últimos dieciséis años, entonces, el efecto promedio en el alza de precios podría perdurar un trimestre más, con sus terribles consecuencias en las economías más pobres y en las vidas humanas

El juego de la doble moral

El incremento en el precio del petróleo tiene repercusiones directas en la economía de los más pobres del país. Desde varias semanas atrás se ha especulado sobre un alza en el pasaje que cobran las unidades de transporte público debido al incremento en los precios del crudo. Para esta semana, la última del mes de mayo, el alza se ha vuelto una realidad. Existe una gran cantidad de autobuses, urbanos e interdepartamentales, que han incrementado las tarifas de viaje. En los autobuses que funcionan en zonas urbanas los incrementos en el pasaje han sido variados y oscilan entre un 47% y 76%, valores que afectan considerablemente la capacidad adquisitiva de los más pobres del país.

Para tener una idea más clara de la problemática se debe partir de un análisis que tome en consideración el salario mínimo vigente. Para ello, se tiene como referencia el promedio del salario mínimo mensual correspondiente a los sectores comercio, servicios, industria y maquila: 155.9 dólares. Se consideran estos sectores debido a que concentran las actividades que se desarrollan mayormente en las zonas urbanas del país y evidentemente en la capital. Si se realiza un estimado de cuanto es lo mínimo que gasta mensualmente una persona en transporte pú-

blico basándose en su salario mínimo, partiendo de que el precio de la tarifa de transporte es de 17 centavos de dólar (cómo lo era anteriormente), resulta que gasta aproximadamente 10.20 dólares al mes. Esto equivale a un 7% del salario mínimo promedio.

Ahora, si se considera el alza en las tarifas de transporte, que ha dejado como resultado un nuevo precio del pasaje ubicado entre 25 y 30 centavos de dólar, la capacidad adquisitiva de los salvadoreños sufre un deterioro. Para el caso de un incremento del pasaje a 25 centavos, ahora el gasto en transporte aumentaría a 15 dólares mensuales, lo cual equivale a un 10% del salario mínimo promedio. En el caso de aquellas personas que se transportan en unidades que incrementaron su tarifa a 30 centavos, el resultado es mucho más delicado: el gasto en transporte se calcula en 18 dólares mensuales, y esto es alrededor del 12% del salario mínimo promedio.

En el último caso, el incremento es considerable y por tanto representa un fuerte desembolso para una persona de escasos recursos que tiene como nivel de ingresos un salario mínimo. Este problema toma una dimensión más real, cuando se considera que, el cálculo explicado en los párrafos anteriores prescinde de varios aspectos: que una persona realiza más de dos viajes en autobús durante el día, que también gasta en el transporte de su cónyuge e hijos y también no cuenta con el total de su salario mínimo (es decir, tiene una disminución del mismo debido al descuento por las prestaciones sociales, las AFP y el ISSS). Si todos estos elementos entraran en consideración, el diagnóstico para el estado del bolsillo de los salvadoreños fuera mucho más crítico.

Además, se debe tener presente que con este salario es necesario acceder a otros bienes y servicios de primera necesidad: alimentos, vivienda, vestido, etc. Y, se quiera aceptar o no, el transporte se convierte en uno de los aspectos de primera necesidad. Se concluye que la situación se encuentra crítica para los salvadoreños más pobres.

En este problema el gobierno juega una doble moral: como es bien sabido, los diferentes gobiernos de ARENA se encuentran a favor del funcionamiento del libre mercado, de lo cual se deriva que deben de estar en favor de la libre competencia. Es decir, que dentro del funcionamiento del mercado y a través de la libre confluencia de la oferta y demanda deben suceder los ajustes en los precios y en las cantidades. Desde esta perspectiva, un incremento en las tarifas de transporte público se presenta como una necesidad que tienen los propietarios de autobuses para poder sufragar el costo de mantenimiento y funcionamiento de las unidades de su propiedad.

En este caso se debe tomar en cuenta que un alza en los precios del crudo deriva en un incremento en los precios del combustible y varios productos necesarios para el mantenimiento de las unidades de transporte. Bajo esta lógica, un incremento en el pasaje es una necesidad de los empresarios que dentro del libre mercado debe ser respetada por el Estado. Sin embargo, el Gobierno ha dicho que aquellos propietarios que permitan un incremento en las tarifas de transporte en los autobuses de su propiedad serán sancionados con multas y decomiso de unidades.

Por otro lado tenemos a los distribuidores de gasolina y diesel que funcionan bajo el libre mercado y que, basándose en una racionalidad de monopolio, establecen muchas veces los precios de los combustibles obteniendo grandes márgenes de utilidad. El gobierno nunca ha hecho un esfuerzo serio por regular el mercado de los hidrocarburos y son los grandes mayoristas junto con las empresas transnacionales quienes determinan los precios nacionales cuando distribuyen el combustible en el mercado local. Aunque ha habido intentos por regular el mercado de los hidrocarburos esto no ha derivado aún en una ley encaminada a conseguir el beneficio de la población.

Resulta extraño que el Gobierno esté presionando al gremio de buseros para que acate sus ordenes y no esté realizando esfuerzos para regular el mercado de los hidrocarburos. Es más efectivo determinar los ajustes desde el mercado de distribución del combustible que presionando a los buseros por no incrementar las tarifas. Se quiere controlar las utilidades que obtienen los propietarios de autobuses sin regular las que obtienen los grandes comercializadores de combustibles, pues, al fin de cuentas estos son representantes de las grandes transnacionales: ESSO, SHELL y TEXACO.

Ello no implica que se esté a favor del incremento del pasaje en los autobuses, sino más bien, lo que se busca es poner en evidencia la doble moral con la que juega el gobierno al no querer regular el precio de los hidrocarburos.

Cuestionado aval a la Ley Antimaras

Los defensores de la Ley Antimaras en El Salvador creyeron —o, lo que es más grave, pretendieron hacer creer— que las Naciones Unidas había acreditado su artilugio jurídico. La afirmación de *El Diario de Hoy*, según la cual una comisión de expertos de la ONU había "avalado" la ley antipandillas que se aplica en el país desde el año pasado, es falsa. La nota periodística ya levantaba sospechas. En su edición del miércoles 19 de mayo, ese matutino sostenía que "los funcionarios salvadoreños, encabezados por la licenciada Marisol Argueta, representante de la Cancillería, y el ministro de Salud, Herbert Betancourt, emprendieron una ofensiva contra sus detractores [18 expertos] que silenció los argumentos en contra de la ley". Según el rotativo, la comisión internacional de notables enmudeció y únicamente hizo algunas recomendaciones al gobierno salvadoreño: privilegiar la aplicación de la Ley del Menor Infractor, aprobar pronto el Código de la Niñez y contribuir a la búsqueda de unos quinientos niños desaparecidos durante el conflicto armado. La certificación de la normativa antipandillas la daban por descontada.

Ese periódico incluso envió a su gerente de redacción, el conocido periodista costarricense Lafitte Fernández, para presenciar la apología de catorce funcionarios salvadoreños en Ginebra sobre la conformidad de la Ley Antimaras con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, suscrita por el Estado salvadoreño en 1990. Un día después de la audiencia, el emisario traía buenas nuevas: "Gana la partida la Ley Antimaras", según el titular de la nota periodística que salía de su pluma. En el país, la policía y otras dependencias del Ejecutivo celebraban el supuesto aval de las Naciones Unidas.

Celebración parcial

Sin embargo, no todos los sectores nacionales se tragaron el anzuelo del emisario periodístico y de la versión gubernamental. El gremio de jueces alegó que, como parte del Estado, no había sido tomado en cuenta en la representación salvadoreña ante la ONU, razón por la cual se desprendía una primera duda acerca de la transparencia con que el gobierno manejaría el asunto. Más tarde, otros funcionarios de justicia advertían sobre una burda manipulación periodística, misma que sería revelada una semana después por otra fuente: la ley antimaras, lejos de ser avalada, había sido duramente criticada por los expertos de la ONU, quienes la consideraron inconstitucional, como la misma Corte Suprema de Justicia salvadoreña lo había hecho.

En efecto, una semana después, el 25 de mayo, *La Prensa Gráfica* anotaba que el Comité de los Derechos del Niño, dependencia de la ONU encargada de ventilar los informes de los Estados parte de la Convención, reconoce la inconstitucionalidad de la normativa, al tiempo que "espera que el gobierno salvadoreño suspenda la aplicación de la normativa antipandillas". Enseguida se recoge parte del informe elaborado por el jurista argentino Norberto Liwsky, miembro de ese Comité: "para nosotros, esa ley resulta contradictoria y ajena a la letra y a los principios de la convención. No es compatible con ella y se lo hemos dicho al gobierno cuando hemos debatido el tema, sabiendo además que la propia Corte Suprema de ese país la estimó anticonstitucional". La nota periodística reactivaba no sólo la vieja pugna comercial entre los dos matutinos de mayor circulación en el país, sino las dudas acerca del apego constitucional y la legitimidad de una normativa que ni siquiera es aplicada por los jueces, cono-

cedores directos de las causas de los jóvenes pandilleros capturados por la policía.

La rendición de cuentas ante la ONU por parte del gobierno salvadoreño no hubiera despertado tantas expectativas de no ser por el ambiente de tensión generado por la aplicación de la Ley Antimaras a menores de edad. Además —razonaron los defensores de esa normativa—, un aval internacional a la mano dura gubernamental en momentos de transición al nuevo gobierno resulta imprescindible. Ni siquiera las reformas a la ley antipandillas —en donde se suprimiría la encarcelación a menores de 18 años— han hecho bajar de tono las críticas de los detractores de una normativa que ha mostrado su ineficacia. La misma nota de prensa señalada arriba reconoce que sólo el 5 por ciento de los más de 6 mil adolescentes —pandilleros o no— capturados en el marco de la aplicación de la normativa, fueron procesados judicialmente. La celebración ante el supuesto aval, pues, no dejó de ser parcial.

Con todo, de la presentación gubernamental salvadoreña en Ginebra, la irresponsable cobertura periodística que se le dio a ese acontecimiento y las reacciones de los sectores nacionales ante los hechos se desprenden algunas consideraciones sobre las cuales es pertinente volver.

Un Estado inconsecuente

En primer lugar, destaca la inconsistencia del Estado salvadoreño. Éste, como signatario de la convención, se halla obligado a rendir un informe ante la ONU cada cinco años. El Salvador ha presentado únicamente dos desde 1990, año en que la suscribió (1994 y 2003). Con carácter de ley de la República, la Convención de los Derechos del Niño está por encima de la legislación secundaria y manda al Estado a "asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley" (artículo 3).

La legislación existente en El Salvador en torno a la niñez no es del todo congruente con la Convención. En más de alguna ocasión han sido señaladas las discrepancias con la normativa vigente (Código de Familia, Ley del Menor Infractor y Código de Trabajo, entre otros). En ese sentido, El Código de la Niñez, en etapa de discusión en la Asamblea Legislativa, debe tomar en cuenta lo establecido en la Convención, a fin de armonizar el marco legal que rija la protección de la niñez y la adolescencia. Al margen de ese debate jurídico, la Ley Antimaras —cuyos apologistas pretenden convertir en ley permanente— no sólo es inconstitucional, sino que lesiona los principios de la Convención.

De ahí que la aplicación de la normativa antipandillas y su justificación ante la ONU han significado un gran apuro para el Estado salvadoreño. Sólo así se explica que el Ejecutivo —a un par de semanas para el traspaso sus funciones— haya enviado a 14 funcionarios a devanarse los sesos ante la comisión encargada de escuchar las explicaciones pertinentes. El costoso envío de esos notables huele más a premio político. Según la versión periodística citada al inicio, los expertos de las Naciones Unidas fueron "silenciados" por la comitiva salvadoreña. No obstante, el sentido común dice que los principios de la Ley Antimaras contradicen el espíritu y la letra de la Convención y que, por tanto, pese a los alegatos, los emisarios salvadoreños no saldrían bien parados. Difícilmente podía justificarse ante la ONU la aplicación de la normativa a menores de 18 años, de suerte que la reforma aprobada recientemente —en la que se eliminaría la encarcelación a niños a partir de los doce años— dice mucho de la astucia del gobierno salvadoreño cuando de presentar una cara gentil a la comunidad internacional se trata. De

todas formas, la Ley Antimaras había cumplido su cometida principal: ser "tema ganador", según una misiva de ARENA filtrada a la prensa, en el contexto de los pasados comicios presidenciales.

Por fortuna, los expertos de la ONU no sólo tuvieron acceso al informe gubernamental, pues organizaciones de la sociedad civil que trabajan en programas a favor de la niñez tienen la facultad de entregar a la comisión sus informes independientes, que complementen o ponen en cuestión, según sea el caso, la versión gubernamental. Una de esas organizaciones fue precisamente Pro-Búsqueda; de ahí que los expertos recomendaran al Estado salvadoreño, entre otras cosas, investigar los casos de unos 500 niños extraviados durante la guerra.

La ética periodística en cuestión

En segundo lugar, debe ponerse en cuestión el profesionalismo de un medio de prensa que, sin mayor ojo crítico, tergiversa los hechos y muestra ante la nación una noticia que no corresponde con lo que verdaderamente ocurrió en Ginebra. Ante todo, dicho medio se ha aprovechado de la escasa información disponible para el salvadoreño de a pie. Habría que dedicarle valiosas horas a la tarea de recabar la información más confiable posible. Aún así, ésta es escasa.

El problema de ese medio no es su espíritu crítico —pues nunca lo va a poner a funcionar en contra del gobierno del cual se considera aliado incondicional—, sino de los más fundamentales principios de la ética periodística. El medio escrito de marras se entregó a la falsificación y tergiversación de una manera burda e irresponsable. Hasta su competencia, que en el fondo responde a los mismos intereses empresariales y políticos, tuvo la decencia de matizar la versión gubernamental.

Imperiosa necesidad de dialogar

El irresponsable manejo de la Ley Antimaras por parte del Ejecutivo es sólo uno de los motivos que dan carácter de urgencia a la necesidad del diálogo en El Salvador. La "súper mano dura", por más que encuentre respaldo en una cultura popular autoritaria, no es la solución integral al problema de la violencia social —ese fenómeno del cual las pandillas es sólo una arista—. La anunciada continuación del plan de Francisco Flores por parte de Antonio Saca no sólo habla de su corta visión al respecto, sino que da un signo inequívoco de que el diálogo es una quimera, al menos en este punto. El todavía presidente electo no ha escuchado a los jueces y a los otros sectores nacionales que cuestionaron la medida.

En definitiva, el compromiso del Estado salvadoreño en el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, verdadero motivo de la cita de la ONU, ha quedado en entredicho. Más cuestionado aparece el supuesto aval a una normativa que refleja la herencia del gobierno saliente: poca disposición al diálogo, imposición, represión estatal, oportunismo político y transgresión a la misma Constitución. El Estado salvadoreño tiene el ingente reto de mostrar ante la comunidad internacional que ha avanzado desde que decidió desterrar la guerra. Pero parte de él, el Poder Ejecutivo, se ha negado a dialogar con el resto de actores políticos.

Torrijos y Ortega, dos casos diferentes

El dirigente sandinista Daniel Ortega, de Nicaragua y el político socialdemócrata Martín Torrijos, de Panamá, son dos casos diferentes en lo que respecta al modo en que han conducido sus respectivas candidaturas presidenciales. En estas líneas, daremos un vistazo a sus trayectorias.

La importancia de apellidarse Torrijos

Es indiscutible el hecho que, aparte de sus cualidades personales, su formación académica y su experiencia política, los lazos familiares del presidente electo de Panamá, Martín Torrijos, le fueron propicios para imponerse a sus rivales, candidatos anodinos o desgastados por el ejercicio corrupto del poder. El ser hijo del general Omar Torrijos, símbolo de la lucha por la soberanía panameña sobre la zona del canal, le ha generado réditos al nuevo mandatario.

En estas líneas analizaremos hasta qué punto cabe esperar que las políticas que implantará desde el gobierno sean coherentes con la lucha por la soberanía del país. Para ello, analizaremos algunos puntos de su plataforma presidencial.

Algunas premisas de la plataforma de Torrijos

"Pecan de ignorancia quienes desvinculan el desarrollo del país moral (sic). Una propuesta de desarrollo sostenible sólo es viable si a la inversión productiva la acompaña la decencia". Con esas palabras, el presidente electo de Panamá expresa la necesidad de dar una respuesta a un problema estructural de nuestras sociedades: la corrupción.

No es extraño el señalamiento. Después de Torrijos, sus sucesores en el solio presidencial han tenido episodios oscuros que aclarar. El también general Manuel Antonio Noriega era acusado de ser el hombre de la CIA en Panamá. Cuando cayó en desgracia con Washington, a Noriega, el militar que blandía un machete en actitud de desafío, se le descubrieron vínculos con el narcotráfico. Guillermo Endara, gobernante al que los bombardeos de George Bush padre sobre los barrios populares de Panamá la abrieron paso a la presidencia, tenía sobre sus espaldas acusaciones de corrupción, al igual que a su sucesor, Ernesto Pérez Balladares.

El que Martín Torrijos levante la bandera de la lucha contra la corrupción, en un gesto que recuerda a su padre levantando las reivindicaciones de la soberanía nacional frente al poder norteamericano, lo convierten, a ojos del electorado, en una figura providencial frente a una tara enquistada en los círculos gobernantes. El tiempo dirá si el Torrijos de este siglo XXI tiene la misma decisión que tuvo el Torrijos del siglo XX para enfrentar a un enemigo desleal y casi omnipotente.

El tema del Canal

La zona del Canal es estratégica para el comercio mundial. Las embarcaciones mercantes tienen ahí un punto desde el cual pueden trasladarse del Océano Pacífico al Atlántico sin necesidad de hacer travesías largas y onerosas. Es, pues, una zona donde se concentra una parte importante del tráfico comercial del planeta, con lo cual se convierte en una joya que muchos se quieren disputar.

Terminado el control estadounidense sobre la zona, control que duró un siglo, el Canal pasó a manos panameñas, tal y como lo diseñó Omar Torrijos, quien negoció directamente con Jimmy Carter, a la sazón, presidente de los EEUU.

Martín Torrijos, en su plataforma presidencial, certifica el buen manejo administrativo de la zona canalera: "El canal de Panamá es el activo más importante de la nación y sus beneficios deben ser tangibles

para todos los panameños. De su eficiente administración depende en gran medida el desarrollo económico futuro. El canal ha sido manejado con transparencia y eficiencia, y en su administración jamás deben introducirse factores perniciosos [nombramientos políticos, o uso como "caja menuda" del gobierno]."

Se prevé la ampliación del canal para el plazo inmediato. El próximo gobierno panameño no está de espaldas a esa realidad: el canal es una zona comercial en expansión. En su plan de gobierno, propone para el canal una combinación de políticas sociales —promete condiciones dignas para los trabajadores de la zona—, junto a acciones con visión empresarial. De hecho, el canal es el pivote de su plan de desarrollo económico y por tanto, se propone atraer mayor inversión privada hacia el mismo.

Sabedor de que la zona del canal —y por tanto, el contacto comercial con el exterior— es fundamental para la economía del país, se ha propuesto hacer " lo necesario para que Panamá sea país bilingüe en inglés en una generación. El inglés es fundamental para crear competitividad e inserción laboral; por ejemplo, en los centros de llamadas y el sector turístico." Quién sabe si su padre se revolvería en la tumba al leer estas cosas.

De Torrijos padre queda la preocupación social: el plan del próximo mandatario tiene una serie de políticas sociales para aliviar los problemas de pobreza, falta de vivienda e inseguridad ciudadana. Pero no esperemos una línea de confrontación con Washington. De la retórica antimperialista de Torrijos padre, no queda nada. El presidente electo constata que EEUU son un socio comercial importante y considera oportuno firmar una tratado de libre comercio, eso sí, en condiciones que no resulten lesivas para el pueblo panameño.

En este semanario, se había planteado el carácter típicamente socialdemócrata del programa de Torrijos: un capitalismo moderado, combinación de empresa privada con políticas sociales. La práctica dirá si es esta fórmula la mejor para asumir los retos del país centroamericano: la necesidad de enfrentar la injusticia estructural, junto a la necesidad de desarrollo económico y de preservar la soberanía nacional, aunque esto último no aparece en ningún lado.

Otra vez Daniel Ortega

En la vida política centroamericana hay personajes que se distinguen por acumular candidaturas presidenciales frustradas. Algunos de estos "eternos candidatos" no han podido llegar a la Presidencia de la república por motivos tan variados, como por ejemplo, la existencia de prácticas fraudulentas en los respectivos sistemas electorales. Otros más, se han resignado a competir a sabiendas de que sus candidaturas eran cartas perdedoras.

Un caso aparte es el del líder sandinista nicaragüense Daniel Ortega. En la década de los ochenta, encabezó la Junta de Reconstrucción Nacional, que sustituyó al derrocado dictador Anastasio Somoza. Luego, llegó a la presidencia de su país elegido democráticamente. De la misma forma democrática, sus pretensiones de reelección fueron derrotadas en las urnas y tuvo que entregar el cargo a Violeta Barrios viuda de Chamorro. Desde el gobierno de Chamorro, pasando por los de Alemán y Bolaños, Daniel Ortega se ha convertido en el "eterno candidato" de su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El político nicaragüense no ha tenido suficiente con acumular tres candidaturas frustradas. Recientemente se anunció que Ortega competirá para las próximas elecciones presidenciales de 2006. La dirigencia sandinista argumenta que el futuro candidato ha aumentado cada vez más la cantidad de votos favorables y que en los próximos comicios sólo cabe esperar el triunfo.

De lo anterior, se pueden sacar algunas lecturas de utilidad. Los argumentos a favor de la candidatura de Ortega obedecen a interpretaciones voluntaristas de la

realidad. Como la dirigencia interpreta que Ortega es lo mejor que le pudo haber ocurrido al partido, eso le basta para concluir que tendrá arrastre popular. No importa que el personaje en cuestión haya padecido el desgaste de haber estado en el poder y de haber perdido tres elecciones, ni que su figura carezca de credibilidad ante los electores. No importa que Ortega sea visto como una señal de que el FSLN no quiere ponerse a la altura de los tiempos y que prefiere jugar a la antigua retórica revolucionaria, aunque su práctica sea distinta.

Acostumbrados a considerarse la "vanguardia" de su pueblo, se consideran con suficiente sabiduría para saber qué es lo mejor para el país. Obnubilados por el ejercicio verticalista del poder, no quieren resignarse a estar abajo, ni tampoco quieren oír lo que tiene que decir ese pueblo por el que han dicho luchar. El problema no es tanto un personaje o una candidatura. Esto es tan sólo el síntoma de un problema mayor.

Es el síntoma de una izquierda antidemocrática, donde un grupo de dirigentes se han atribuido la representatividad del partido. Es un mal de la izquierda que debe erradicarse. Un yerro muy común es que los dirigentes "históricos" no entiendan que si contribuyeron a la lucha por la democracia, ello no implica que sean imprescindibles. Así, muchos consideran que el país, el partido o los procesos históricos necesitan tanto de su tutela, que se aferran a los cargos perennemente. Un caso muy distinto, y al que debieran prestar su atención, es el del ex presidente sudafricano Nelson Mandela. Este dirigente político fue el símbolo de la lucha contra el segregacionismo racial, el *apartheid*. De la cárcel, salió a la silla presidencial. Cuando concluyó su cargo, dio paso a otras figuras dentro de su partido, el Consejo Nacional Africano. No se engolosinó con el puesto. El resultado: Nelson Mandela es un hombre respetado, que continúa simbolizando la lucha por la libertad en su país y que no se ha manchado con la ambición del poder. Desde su retiro, Mandela aporta su sabiduría y su experiencia políticas al país. Ojalá así hicieran muchos en Centroamérica.

La dirigencia histórica del FSLN —los ex comandantes de la Revolución— cumplió un papel importantísimo en la lucha antisomocista y en la democratización de Nicaragua. En el seno de su partido, es innegable lo respetable de sus trayectorias —algunos de ellos, como Tomás Borge, son algunos de los que fundaron la organización, a la par del ya legendario Carlos Fonseca Amador—. Sin embargo, tanto el país como el partido están en otro momento. No pueden estarse perpetuando los cuadros y los métodos del pasado. Es necesario que el partido se oxigene con dirigentes nuevos, que no hayan sufrido el desgaste de la llamada "piñata" y que sean capaces de adaptarse a las nuevas realidades del país.

Es lamentable decirlo, pero el FSLN ha desperdiciado la oportunidad que tres períodos en la oposición le han dado. Desde la oposición, el sandinismo pudo haberse ligado a los sectores populares para superar la acusada brecha entre los dirigentes y las bases. Sin embargo, estar en la oposición dio paso a una práctica muy diferente. En vez de democratización, lo que hubo fue caudillismo. En lugar de acompañar las reivindicaciones de los distintos sectores sociales desde los espacios legislativos, lo que se hizo fue recurrir a las ofertas de diálogo y a las amenazas de movilización popular, según lo dictara la conveniencia política.

Lamentablemente, el partido mayoritario de la izquierda nicaragüense persiste en mantener unas prácticas autoritarias y un discurso beligerante que emplea para ocultar sus carencias mayores: su alejamiento de las mayorías populares, su incapacidad para articular propuestas realistas y de aportar su experiencia para aumentar el nivel organizativo de su población.

Las niñas y niños no van a Ginebra

Desde este espacio hemos insistido en la capacidad del bloque hegemónico empresarial salvadoreño para difundir, mediante una plataforma de voceros y comunicadores, sus mensajes. Hoy esa situación alcanza su nivel más alto al asumir la Presidencia de la República, el próximo martes 1° de junio, uno de estos difusores. Cuando faltan escasos días para el traspaso del cargo, son muchas las personas e instituciones que analizan y valoran los cinco años de la administración saliente. Lo variado y abundante de las opiniones, no ha alcanzado lo suficiente para dejar establecida con claridad la relación entre los tres gobiernos sucesivos del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y los resultados obtenidos durante esos quince largos años. Porque en realidad han sido tres lustros de un modelo exclusivo y excluyente que, no obstante y como sea, recibió en las urnas el refrendo para su continuidad el pasado domingo 21 de marzo.

Una de las consecuencias más visibles del fracaso del modelo en cuestión, son los serios problemas que enfrentan los jóvenes para insertarse en la sociedad. Los obstáculos son innumerables y van desde la falta de oportunidades laborales hasta tener que ser objetivos prioritarios de la violencia que padecemos. Basta observar con detenimiento las estadísticas de las muertes violentas en el país, para identificar que este sector de la población —mayoritario, por cierto— es el que padece con mayor brutalidad los efectos de una realidad nacional bastante negativa para las mayorías populares.

Este no es un asunto exclusivo de la "administración Flores". No. En todo caso, se trata de una situación grave que se hace totalmente visible en la década de los noventa —en el siglo pasado— y al que ningún gobierno "arenero" hasta la fecha se ha querido enfrentar con rigor y seriedad. Si el todavía Presidente de la República tiene un considerable grado de responsabilidad en la problemática que afecta a adolescentes y jóvenes, es por haber mantenido y agudizado las condiciones que impiden un normal desarrollo humano en general y, sobre todo, para la juventud.

El ejemplo más evidente y que queremos ilustrar en este comentario es, sin duda, el de las pandillas juveniles o "maras". Además de la permanente expulsión salvadoreñas y salvadoreñas hacia el norte del continente, la proliferación por todos los rincones del país de estos grupos y su accionar violento es la muestra más singular y palpable de que el modelo ha fracasado irremediablemente. No obstante, provoca mayor sorpresa ver cómo —ante unas consecuencias tan dañinas para la sociedad en su conjunto— no sólo no se quiere encarar la situación sino que —para colmo de males— los "esfuerzos" oficiales realizados tienden más a agravar que a solucionar las cosas. Peor aún, ni siquiera se observa la mínima intención de reconocer que este fenómeno es producto de un esquema pensado y ejecutado para beneficiar a unos pocos.

Por ello, es necesario reprobar ciertas actitudes observadas por parte de algunas de estas empresas de la comunicación a las que nos referimos al inicio. Como han demostrado en numerosas ocasiones, su papel no es el de hacer país. Si ya han quedado evidenciadas las dificultades que tienen para ofrecernos noticias de verdad, es más preocupante que gasten tinta y espacio en criticar y estigmatizar las consecuencias de este modelo al que hacemos referencia, sin poner el dedo en la llaga sobre sus causas más profundas.

La última polémica pública en este ámbito se originó cuando el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recibió, hace unos días, el informe que El Salvador presentó sobre el grado de cumplimiento que nuestro país observa de la normativa internacional relativa a la protección de los derechos de las niñas y los niños.

La semana pasada uno de los titulares que ocupó uno de estos medios de prensa escrita anunciaba con "bombo y platillo" que Naciones Unidas daba el visto bueno y casi hasta aplaudía la llamada "ley antimaras". La noticia de primera plana mostró más los deseos del enviado especial, que su rigor profesional por ofrecer la verdad de los hechos. Si el periodista estaba allí, al parecer bebió de otras fuentes. En todo caso, hasta el 4 de junio sabremos qué opina oficialmente el máximo organismo internacional sobre esta ley; ello, sin perjuicio que algunos de sus funcionarios ya

expresaron su parecer. Mientras, el espectáculo seguirá vigente en ciertos medios que más que desnudar la realidad se desnudan ante ella, dejando de ser vehículos de comunicación para ser medios de confusión.

Por esa tergiversación de los hechos, es necesario referirnos a ciertos hechos bastante "anecdóticos" que ocurrieron la semana anterior en Ginebra, Suiza. Es necesario y obligatorio para desenmascarar las falsas informaciones que infundadamente notificaban el éxito de la delegación salvadoreña en ese foro internacional. Y porque es necesario que trascienda públicamente la triste imagen que algunos altos funcionarios del gobierno, poco o nada acostumbrados a rendir cuentas, están transmitiendo en el exterior.

La representación del gobierno que agoniza, cumplió con el guión de costumbre cada vez que acuden ante organismos internacionales de derechos humanos para dar explicaciones sobre sus actos realizados, como sucedió recientemente en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la ejecución de Ramón Mauricio García Prieto Giralt. Así, en Ginebra, la representación oficial inició su incoherente intervención repitiendo textualmente información que ya había sido enviada al citado organismo de Naciones Unidas. Por las contradicciones observadas, precisamente, los funcionarios de Naciones Unidas solicitaron "a la ilustrada representación del gobierno de El Salvador" que rindiera las explicaciones pertinentes.

Si el incidente anterior causó sorpresa, indignación y vergüenza para los salvadoreños y salvadoreñas pertenecientes a las organizaciones sociales presentes en dicha audiencia, lo que siguió reveló el grado de cinismo que poseen algunos funcionarios salvadoreños: el Director del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia (ISNA), defendió la decisión del Ejecutivo de reducirle el presupuesto en perjuicio de la niñez y adolescencia. Tampoco la jefa de misión tuvo vergüenza en mencionar, como un logro del gobierno, la existencia y el trabajo de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Precisamente a ésta no sólo se le ha negado apoyo oficial, sino que además se ha obstaculizado y menospreciado el trabajo que realiza. Pese a ello, su esfuerzo valiente y valioso ha permitido ubicar a centenares de niños y niñas desaparecidos durante la guerra.

Asimismo, sobre la delincuencia juvenil, varios miembros del Comité de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la aplicación a los menores de edad de la "ley antimaras", la cual niega la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En ese marco, interrogaron a los delegados oficiales sobre el grado de efectividad que —durante los últimos meses— ha tenido dicha normativa que fue declarada como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. De nuevo, la misión gubernamental quedó en evidencia al no manejar cifras concretas para responder a esos cuestionamientos.

Finalmente, se abordaron otros temas tales como la evidente ausencia en los informes oficiales de datos sobre la población indígena en nuestro país o sobre el impacto de las medidas de privatización en el goce de los derechos económicos y sociales de la niñez y adolescencia, entre otros. Concluido el interrogatorio, uno de los funcionarios internacionales le preguntó directamente a la delegación: "¿Tiene el gobierno la voluntad política de cumplir la Convención hasta sus últimas consecuencias?" Esa interpelación la volvemos a formular hoy, entre otras razones, porque los niños y niñas no estuvieron ni presentes, ni mucho menos representados en Ginebra, debido a la deplorable actuación de las personas que integraban la delegación gubernamental. Más aún, estuvieron tan ausentes como lo han estado en la mayoría de políticas públicas que en su nombre anuncian en nuestra vida sumergida casi permanentemente en campañas electorales.

Los niños y las niñas de El Salvador necesitan funcionarios y funcionarias que den soluciones a sus problemas de vivienda, salud y educación. Gente profesional que les permitan reencontrarse con sus familiares que sobrevivieron a la guerra y, principalmente, que tengan voz y voto cuando se discuta su destino: Porque en esos debates, la niñez se convierte en una estadística tan fácil de maquillar según los intereses oficiales. Es éste y no la presencia de mercenarios de la palabra que mienten desde sus columnas periodísticas, el tipo de compañía que necesitan las delegaciones oficiales cuando comparece en foros internacionales.